



RESOLUCION No. CSJATR18-276
Miércoles, 09 de mayo de 2018

Por medio de la cual se resuelve queja de Vigilancia Judicial Administrativa impetrada por el Sr. Antonio Retamoza Martínez contra el Juzgado Primero de Ejecución Civil del Circuito de Barranquilla.

Radicado No. 2018 - 00128 Despacho (02)

Solicitante: Sr. Antonio Retamoza Martínez.

Despacho: Juzgado Primero de Ejecución Civil del Circuito de Barranquilla.

Funcionaria (o) Judicial: Dra. Emilce Sofía Ortega Rodríguez.

Proceso: 2016 – 00278 y radicado interno No. C 15-0019-17.

Magistrada Ponente (E): Dr. JUAN DAVID MORALES BARBOSA.

El Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico.

En uso de las facultades conferidas en el numeral 6 del Artículo 101 de la Ley 270 de 1996, Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y el Acuerdo PSAA 8716 de 2011 de la entonces Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, procede a emitir resolución dentro de la vigilancia con radicado 2018 - 00128 con fundamento en lo siguiente:

I - RESEÑA DEL CASO

El presente trámite se inicia en atención a petición instaurada por el Sr. Antonio Retamoza Martínez, quien en su condición de presidente de la Veeduría Departamental del Atlántico, presuntamente autorizado por la parte demandada dentro del proceso distinguido con el radicado 2016 – 00278 y radicado interno No. C 15-0019-17 el cual se tramita en el Juzgado Primero de Ejecución Civil del Circuito de Barranquilla, solicita Vigilancia Judicial Administrativa del proceso en referencia, al manifestar que no se le ha dado trámite a la solicitud de expedición de copias, impetrada el 25 de octubre de 2017.

La solicitud de vigilancia fue recibida en este Consejo Seccional, el 09 de abril de 2018 y es necesario proferir decisión en atención a la petición instaurada.

II - COMPETENCIA

La **competencia** para adelantar el trámite de vigilancia judicial está asignada a la Sala Administrativa de los Consejos Seccionales de la Judicatura en el numeral 6 del artículo 101 de la Ley 270 de 1996, Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y conforme al artículo 2º del Acuerdo No. PSAA16-10559 del 9 de agosto de 2016, las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales se denominarán en adelante Consejos Seccionales de la Judicatura, situación que no afecta las competencias establecidas con anterioridad en la Ley y reglamentos, luego este Consejo Seccional de la Judicatura, es

Palacio de Justicia, Calle 40 No. 44-80 Piso 6 Edificio Lara Bonilla
Telefax: 3410159 www.ramajudicial.gov.co
Email: psacsjbqlla@cendoj.ramajudicial.gov.co
Barranquilla-Atlántico, Colombia



competente para emitir la decisión conforme al Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, en consideración a que la petición de vigilancia se refiere al trámite de un expediente cuyo conocimiento y etapas procesales adelanta un funcionario judicial, adscrito a la circunscripción territorial corresponde al Distrito Judicial de Barranquilla. El artículo primero del Acuerdo antes citado que reglamenta la vigilancia judicial administrativa determina lo siguiente:

“Competencia. De conformidad con el numeral 6° del artículo 101 de la Ley 270 de 1996, corresponde a la Sala Administrativa de los Consejos Seccionales de la Judicatura del país, ejercer la Vigilancia Judicial Administrativa para que la justicia se administre oportuna y eficazmente, y cuidar del normal desempeño de las labores de funcionarios y empleados de los despachos judiciales ubicados en el ámbito de su circunscripción territorial....

La vigilancia judicial es diferente de la acción disciplinaria a cargo de las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura y de la facultad de Control Disciplinario de la Procuraduría General de la Nación.”

III – TRAMITE

Constituye premisa normativa dentro del presente trámite, el Acuerdo PSAA11-8716 del 2011 expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, reglamento de carácter permanente orientado a garantizar que la labor de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial se ejerza de manera oportuna y eficaz, trámite que bien puede iniciarse de oficio o a petición de la parte que aduzca interés legítimo y debe recaer sobre acciones u omisiones específicas en procesos singularmente determinados (Artículo tercero del PSAA11-8716)

El procedimiento para adelantar vigilancia administrativa, se describe en el artículo segundo del citado Acuerdo, indicando los siguientes pasos:

- a) *Formulación de la solicitud;*
- b) *Reparto;*
- c) *Recopilación de la información;*
- d) *Apertura, traslado y derecho de defensa;*
- e) *Proyecto de decisión;*
- f) *Notificación y recurso;*
- g) *Comunicaciones.*

Conforme a lo anterior, en cuanto a la actuación adelantada en este Consejo Seccional, se evidencia que luego de recibir la queja el 09 de abril de 2018, se dispone repartir la respectiva solicitud, correspondiéndole su conocimiento y trámite a este Despacho; seguidamente se decide recopilar la información en auto del 11 de abril de 2018; en consecuencia se remite oficio número CSJATO18-482 vía correo electrónico el día 17 del mismo mes y año, dirigido a la **Dra. Emilce Sofía Ortega Rodríguez**, Jueza Primera de Ejecución Civil del Circuito de Barranquilla, solicitando informe bajo juramento sobre la actuación procesal dentro del proceso distinguido con el radicado 2016 – 00278 y radicado interno No. C 15-0019-17, poniendo de presente el contenido de la queja.

Dentro del término concedido por esta Corporación a la Jueza Primera de Ejecución Civil del Circuito de Barranquilla para que presentara sus descargos, la funcionaria judicial no allegó respuesta, razón por la cual se procedió a proferir por parte del despacho auto de apertura al trámite de vigilancia judicial administrativa de fecha 03 de mayo de 2018 y comunicándole sobre el presente trámite mediante correo electrónico el mismo día.

El día 04 del mes de mayo del presente año, la Dra. Emilce Sofía Ortega Rodríguez, en su condición de Jueza del recinto judicial vinculado allega el siguiente escrito:

"(...)De igual forma, respecto a las inconformidades presentadas por el quejoso, y que sustenta la solicitud de la presente vigilancia es menester enunciar que el Dr. ANTONIO RETAMOZA MARTÍNEZ, quien manifestó actuar en calidad de Presidente de la RED DE VEEDURÍAS DEL ATLÁNTICO, para la calenda del 25 de Octubre de 2017, allego escrito en el que manifestó, que recibió autorización de la señora ELVIRA PATRICIA HENRÍQUEZ ALVAREZ, para que ejerciera el control social dentro del proceso de referencia, y en razón a ello solicitó copias a sus costas del expediente, así como una cita de carácter urgente en el Juzgado, solicitud a la que se accedió a través de auto fechado 20 de Noviembre de 2017, notificado por estado No. 183 del 21 de Noviembre de esa anualidad, en el que se ordenó que por Secretaria se expidieran copias del proceso de la referencia, previo pago del arancel judicial correspondiente, solicitadas por el Dr. RETAMOZA MARTINEZ, sin que hasta la fecha se haya aportado arancel alguno por parte del solicitante, para efectos de la expedición de copias a sus costas.

Así mismo y respecto a la solicitud de cita con esta Togada, por el presentada, cabe señalar que en los términos de los artículos 22 y 26 del capítulo IV del Acuerdo No. PSAA13-9984 de Septiembre 05 de 2013, se dispuso que la atención a los usuarios de la justicia o al público en general, e información relacionada con los procesos asignados a los Jueces de Ejecución Civil Circuito, serán atendidas por los empleados de la oficina de Ejecución Civil Circuito, y no por las Dependencias Judiciales, de igual forma cabe manifestar que este Dependencia Judicial tiene asignado para su conocimiento y trámite los procesos ejecutivos provenientes de 8 de Juzgados Civiles del Circuito de Barranquilla, repartidos en forma aleatoria.

Por otra parte, y luego de una revisión exhaustiva del proceso de la referencia, se constató fehacientemente, que no existe mora judicial por parte de esta Agencia Judicial, en razón a que se ha dado cumplimiento a todos y cada uno de las solicitudes elevadas por las partes, al haberse actuado con la debida prudencia que corresponde, y se han resuelto en derecho a todas y cada uno de los memoriales presentados por la parte demandada, y su apoderada desde la primera elevada el día 08 de Agosto de 2017 hasta la última presentada pata la calenda del 19 de Octubre de esa misma anualidad.

En los anteriores términos dejo rendido el informe solicitado, en espera sea de su aceptación y ordene el archivo de la queja, sin más consecuencias, comunicándole que remito copia autenticada del auto proferido en fecha de 20 de Noviembre de 2017, notificado por estado No. 183 del 21 de Noviembre de esa anualidad, se itera, en el que se ordenó que por secretaria se expidieran copias del proceso solicitadas por el Dr. RETAMOZA MARTINEZ, dejando a su disposición el expediente de la referencia con un cuaderno con 274 folios. (...)"

Seguidamente, esta Judicatura, procedió a revisar los documentos que acompañan los descargos presentados por la Dra. Emilce Sofía Ortega Rodríguez, Jueza Primera de Ejecución Civil del Circuito de Barranquilla, constatando la expedición del proveído de fecha 20 de noviembre de 2017, en el cual ordena por secretaria expedir las copias del proceso.



IV – PROBLEMA JURÍDICO

Según lo expuesto el **problema jurídico** que se presenta se refiere a determinar si de conformidad con los hechos planteados se ha cometido falta contra la eficacia de la administración de justicia que amerite disponer apertura de Vigilancia Judicial y si es procedente disponer los efectos indicados en el Acuerdo PSAA11-8716 del 2011, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en el trámite del proceso 2016 – 00278 y radicado interno No. C 15-0019-17.

V – CONSIDERACIONES

Al describir el marco normativo de la Vigilancia judicial, es necesario observar que constituye normatividad rectora en el presente trámite, el Acuerdo No. PSAA11-8716 de 2011 expedido la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y conforme a la reglamentación allí establecida, corresponde a este Consejo emitir decisión debidamente motivada *“sobre si ha habido un desempeño contrario a la administración oportuna y eficaz de la justicia”* en el preciso y específico proceso o actuación judicial que se trata, así se indica en el artículo séptimo del Acuerdo en cita, siguiendo los parámetros trazados en la Ley Estatutaria de la administración de justicia, artículo 101 numeral 6, en relación con el artículo 4 de la misma Ley, siguiendo los lineamientos del art 228 de la Constitución Nacional.

Según lo anterior, en el ejercicio de la vigilancia judicial, se resalta en el artículo primero del Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, el principio de celeridad, al establecer que precisamente su ejercicio tiene por objeto que la justicia se administre de manera oportuna y eficaz. Se pretende con ello en consecuencia eliminar retrasos injustificados y obtener el ejercicio de una justicia pronta y cumplida en beneficio de quienes acuden en calidad de usuarios a los estrados judiciales, para obtener el cumplimiento efectivo del deber plasmado en el artículo 4 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la administración de justicia, modificado por el artículo primero de la Ley 1285 de 2009, según la cual *“la administración de justicia debe ser pronta y cumplida y eficaz en la solución de fondo de los asuntos que se sometan a su conocimiento”*.

En este orden de ideas, la vigilancia judicial de carácter administrativo hace especial énfasis en la necesidad de verificar la *“oportunidad y eficacia de la administración de justicia”*, siguiendo los lineamientos constitucionales establecidos en el artículos 228 de la Constitución Política que expresa:

“Artículo 228: “La administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la Ley y en ellas prevalecerá el Derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo. (Subraya para resaltar la idea)

Además, la misma Constitución da directrices encaminadas a reglar la eficacia de la administración de justicia cuando indica:

Artículo: 257: “Con sujeción a la ley, el Consejo Superior de la judicatura cumplirá las siguientes funciones:

(...) 3. Dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la administración de justicia, (...)

De manera consecuente con la directiva anterior, a fin de ampliar el análisis jurídico de las disposiciones que rige el trámite de vigilancia en referencia, se impone considerar los lineamientos establecidos en el artículo 101, numeral 6 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia que señala:

“Las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura tendrán las siguientes funciones:

...6. Ejercer la vigilancia judicial para que la justicia se administre oportuna y eficazmente y cuidar del normal desempeño de las labores de funcionarios y empleados de esta Rama”,

La disposición transcrita, fue reglamentada mediante Acuerdo No. PSAA11-8716 expedido el 6 de octubre de 2011 por la otrora Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en el cual además de propender por la eficacia de la Administración de justicia, de manera expresa se resalta el deber de respetar la independencia judicial como principio esencial de la administración de justicia, siguiendo así la orientación Constitucional establecida en el artículo 228 de la Carta Fundamental y la directriz Estatutaria establecida en la Ley 270 de 1996 en su artículo quinto.

El reglamento de la vigilancia judicial de manera particular indica en el artículo catorce del Acuerdo No. PSAA11-8716 de 2011, lo siguiente:

“Independencia y Autonomía Judicial. En desarrollo de las actuaciones de vigilancia judicial administrativa, los Magistrados de la Sala Administrativa competente deberán respetar la autonomía e independencia de los funcionarios, de tal suerte que en ningún caso podrán sugerir el sentido en que deben proferir sus decisiones.”

El principio de independencia judicial, no solo se resalta en la disposición transcrita, sino que de manera específica la Circular PSAC 10-53 del 10 de diciembre de 2010 emitida por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, indica:

“... al analizarse la competencia atribuida en el artículo 101 numeral 6 de la Ley 270 de 1996 a los Consejos Seccionales, es claro que apunta exclusivamente a que se adelante un control de términos, en aras de velar por una administración de justicia oportuna y eficaz, sin que de manera alguna se pueda utilizar este mecanismo para ejercer una indebida presión sobre los funcionarios judiciales, o para influir en el sentido de sus decisiones. No podrán por tanto los Consejos Seccionales- Salas Administrativas- indicar o sugerir el sentido de las decisiones judiciales, la valoración probatoria, la interpretación o aplicación de la Ley y en fin nada que restrinja su independencia judicial en el ejercicio de su función judicial.”

Se resalta en la Circular antes citada, lo preceptuado en el artículo 228 de nuestra Carta Fundamental, según el cual se imprime especial protección al principio de independencia judicial, siguiendo orientación de Normas Internacionales, entre ellas: la Declaración Universal de Derechos Humanos (art.10), el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, (Art.14), La convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.1) y el Estatuto del Juez Iberoamericano (artículos 1, 2, y 4).

En torno a la eficacia y eficiencia, habrá de entenderse siguiendo los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, el deber de impartir pronta y cumplida justicia,

mediante la racionalización de elementos disponibles y la aplicación de procedimientos legales correspondientes, pretendiéndose obtener con ello una reducción en los niveles de atraso, el efectivo cumplimiento de la gestión judicial y el trámite oportuno de cada etapa procesal, dándose un cumplimiento efectivo a los términos judiciales.

- **De Las Pruebas Aportadas Por Las Partes:**

Al estudiar la solicitud de Vigilancia Judicial Administrativa suscrita por el Sr. Antonio Retamoza Martínez, quien en su condición de Presidente de la Veeduría Departamental del Atlántico, presuntamente autorizado por la parte demandada dentro del proceso distinguido con el radicado 2016 – 00278 y radicado interno No. C 15-0019-17, el cual se tramita en el Juzgado Primero de Ejecución Civil del Circuito de Barranquilla, aportó como prueba el siguiente documento:

- Copia simple de memorial de 25 de octubre de 2017, por medio del cual solicita, entre otras, copia del proceso referenciado.

Por otra parte la **Dra. Emilce Sofía Ortega Rodríguez**, Jueza Primera de Ejecución Civil del Circuito de Barranquilla, al momento de presentar sus descargos, allegó los siguientes documentos:

- Copia simple de auto de fecha 20 de noviembre de 2017, por medio del cual ordena por secretaría la expedición de copias del proceso referenciado.
- Expediente No. 2016-00278 y radicado interno No. C 15-0019-17.

- **Del Caso Concreto:**

Según lo anterior se procede a emitir **consideraciones finales** en torno al análisis de la queja presentada el pasado 09 de abril de 2018 por el Sr. Antonio Retamoza Martínez, en su condición de Presidente de la Veeduría Departamental del Atlántico, presuntamente autorizado por la parte demandada dentro del proceso distinguido con el radicado 2016 – 00278 y radicado interno No. C 15-0019-17 el cual se tramita en el Juzgado Primero de Ejecución Civil del Circuito de Barranquilla, en la que aduce la existencia de una mora en el actuar por parte del juzgado relacionado dentro del proceso de su interés, con relación a darle trámite o pronunciarse sobre la solicitud de copia del expediente del mencionado proceso.

Sin embargo, con base en lo expuesto en los descargos allegados por parte de la **Dra. Emilce Sofía Ortega Rodríguez**, Jueza Primera de Ejecución Civil del Circuito de Barranquilla, los cuales se considera rendidos bajo la gravedad del juramento, hace un pequeño recuento histórico de las actuaciones surtidas dentro del proceso relacionado, donde manifiesta que la última actuación se dio mediante providencia de 20 de noviembre de 2017, por medio del cual se ordenó por secretaria, la expedición de copias del proceso, con ello, no existe situación alguna por normalizar por parte de la titular del recinto judicial.

Por su parte, la Corte Constitucional, en fallo de Tutela T-230 del 13 de abril de 2013 indico: *"No obstante, la jurisprudencia también ha señalado que, atendiendo la realidad del país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento de los términos procesales no es imputable al actuar de los funcionarios judiciales. Así, por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un mayor tiempo del establecido en las normas y en*

la Constitución para su estudio, para valorar pruebas o para analizar la normatividad existente. Por ello, la jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es imputable al actuar del juez o cuando existe una justificación que explique el retardo, no se entienden vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia”.

En el mismo sentido, la Corte Constitucional en sentencia T-803 de 2012, señaló: *luego de hacer un extenso recuento jurisprudencial sobre la materia, esta Corporación concluyó que el incumplimiento de los términos se encuentra justificado (i) cuando es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se constata que efectivamente existen problemas estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo previsto en la ley. Por el contrario, en los términos de la misma providencia, se está ante un caso de dilación injustificada, cuando se acredita que el funcionario judicial no ha sido diligente y que su comportamiento es el resultado de una omisión en el cumplimiento de sus funciones.*

Lo anterior no obsta para recordar el deber de atender los asuntos sometidos a estudio del juzgado vinculado dentro de los límites del artículo 4 de la ley 270 de 1996, modificado por el artículo 1° de la ley 1285 de 2009, según el cual la administración de justicia debe ser pronta y cumplida, a fin de evitar inconformidades en los usuarios de la administración de justicia y el ejercicio de acciones que afectan la buena imagen institucional.

Así las cosas, en el estudio del caso sometido a consideración, este Consejo no encontró mérito para considerar la existencia de una situación contraria a la oportuna y correcta administración de justicia a la luz del Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, por parte de la Jueza Primero de Ejecución Civil del Circuito de Barranquilla. Toda vez que la funcionaria ya había proferido el auto, ordenando la expedición de las copias del proceso ya referenciado, razón por la cual no le asiste situación de deficiencia alguna por normalizar, dando cumplimiento a lo ordenado en el artículo 6 del Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, por tanto, en virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 7°¹ del Acuerdo PSAA-11 8716 de 2011, este Consejo Seccional estima que no es procedente aplicar los correctivos y anotaciones del mencionado acuerdo, a la **Dra. Emilce Sofía Ortega Rodríguez**, Jueza Primera de Ejecución Civil del Circuito de Barranquilla.

En consecuencia, y de conformidad con las consideraciones esbozadas en precedencia, el Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: No imponer los efectos del Acuerdo PSAA11-8716 del 2011, expedido por la entonces Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, a la **Dra. Emilce Sofía Ortega Rodríguez**, Jueza Primera de Ejecución Civil del Circuito de Barranquilla, por el trámite del proceso distinguido con el radicado 2016 – 00278 y radicado interno No. C 15-0019-17, conforme a las consideraciones.


¹Para el efecto se tendrá en cuenta que el hecho no obedezca a situaciones originadas en deficiencias operativas del despacho judicial, no atribuibles al servidor judicial, así como los factores reales e inmediatos de congestión no producidos por la acción u omisión del funcionario o empleado requerido, todo lo cual lo exime de los correctivos y anotaciones respectivas.

ARTICULO SEGUNDO: Comunicar al servidor(a) judicial y al quejoso de la vigilancia judicial administrativa, por correo electrónico o cualquier otro medio eficaz, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8° del Acuerdo PSAA11-8716 de 2011.

ARTICULO TERCERO: La anterior decisión se expide conforme a la ley y al reglamento.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE


JUAN DAVID MORALES BARBOSA
Magistrada Ponente (E)


CLAUDIA EXPOSITO VELEZ
Magistrada.